

Policy brief

Imaginar futuros desde las fronteras energéticas



PROYECTO GANADOR
DEL ESTÍMULO A LA
INVESTIGACIÓN SOBRE
ÉLITES REGIONALES
ICANH 2024

Pablo Jaramillo
Valeria Tafurt
Rafael Montes
Merardo Gutiérrez

Contenido

Puntos principales.....	3
¿Por qué nos enfocamos en desigualdades y transición energética?.....	4
¿Por qué el sur de La Guajira y norte del Cesar?.....	6
Una historia de legados de desigualdad	8
Acaparamiento, toxicidad y violencia	10
¿Cómo están reaccionando las élites?.....	12
¿Qué nuevos valores están apareciendo?	14
Futuros en transición	16
Recomendaciones	17
Agradecimientos.....	19
Bibliografía	19
Metodología	20
Estudiar la frontera energética	20

Puntos principales

- La bonanza solar que actualmente ocurre en lugares del país como el norte del Cesar y La Guajira está reordenando las relaciones territoriales y políticas de la región.
- La transición energética está operando sustancialmente bajo legados históricos de extracción, vulnerabilidad energética, acaparamiento de tierras y violencia.
- Mientras élites políticas históricas están ansiosas por inversiones que los evaden, también ven oportunidades en las rentas que ofrece y los esquemas basados en los PDETs.
- Las Comunidades Energéticas ofrecen una fuerza importante para la organización comunitaria, pero también representa riesgos de cooptación con fines electorales.
- Existen lenguajes de responsabilidad, de la “cultura del pago” y del trabajo de cuidado (no pagos) alrededor de las infraestructuras energéticas, que corren el riesgo de invisibilizar las exclusiones históricas de poblaciones vulnerables en el Caribe colombiano.
- Hay una cantidad importante de experimentos políticos, técnicos y comunitarios que representarán una gran transformación hacia la equidad y la transición energética justa en caso de que sean potenciados.

¿Por qué nos enfocamos en desigualdades y transición energética?

Alrededor del 2016, en una socialización con una nueva empresa de parques solares en Guamachal, corregimiento de San Juan del Cesar, varios líderes escucharon por primera vez el término “transición energética”. Con el pasar de los años se hizo más repetitivo escuchar la palabra, más empresas llegaron y el tema empezó a rondar cada vez más entre los funcionarios de la alcaldía y los terratenientes.

A través de llamadas telefónicas las empresas iniciaron el contacto con los dueños de los predios ideales para instalar los proyectos. En la alcaldía, llegaron a anunciar su presencia en la región para la realización de los diagnósticos. Todo esto sólo serían grandes síntomas de una naciente gripa solar.

Para poder entender este virus, ha sido necesario reconsiderar la transición energética como una propuesta o incluso un imperativo resultado de la crisis climática y civilizatoria. Esto permite comprenderla como un ordenamiento afectivo que configura cuerpos, paisajes, infraestructuras, grupos, éticas y políticas, y que opera a través de la creación de nuevas fronteras, tal como ocurre con procesos extractivos. Al mismo tiempo, la transición energética se nutre de un régimen más profundo y de mayor duración en Colombia: la transición como un estado crónico en nuestras vidas, la idea de que hay algo más allá, en el futuro, que resulta de la resolución definitiva de los conflictos que atraviesan nuestras vidas.

La transición energética, además, ha estado soportada por grupos de terratenientes, políticos y empresas privadas, pero se ha soportado fundamentalmente en instituciones, relaciones e infraestructuras a través de los cuales ha operado el poder de estos individuos. Estos elementos han sido originados en la larga historia extractiva de La Guajira y el Cesar: una historia de extracción de perlas, cueros, carnes, dividivi, marihuana, carbón, algodón y, ahora, energía eléctrica de origen renovable. Por eso, ahora es más que necesario comprender cómo se están (re) configurando formas de desigualdad en la posesión de la tierra, recursos institucionales, epistémicos, entre otros.

Pero la transición energética también representa un potencial transformador de estas estructuras de poder. Las constantes exigencias de las poblaciones por ser incluidas y beneficiadas de estos procesos, tras una serie de legados extractivos, da paso a imaginar otros futuros posibles. En este sentido, ampliar la discusión alrededor de los futuros energéticos desde el Sur global junto a las poblaciones marginadas ha sido parte vital del devenir de este análisis. Se realizaron procesos participativos de investigación junto a dos líderes locales de Juntas de Acción Comunal, así como espacios de codiseño para potenciar la imaginación de otros futuros desde las comunidades. El uso de Tenkuä, un juego de futuros participativos que busca que los participantes imaginen e implementen

mejores futuros para su comunidad (Paniagua & Cornejo, 2020), permitió realizar la exploración de los futuros deseados por los habitantes de Guamachal y Los Haticos, corregimientos de San Juan del Cesar.

Precisamente a partir de las discusiones nacidas del espacio de codiseño, y de poner el foco en la vida cotidiana de las comunidades y en las relaciones entre personas y torres de energía, cables y liderazgos políticos, pájaros y acuíferos, baterías y carreteras, personas y violentos arcos eléctricos, se articulan las presentes reflexiones y recomendaciones.

¿Por qué el sur de La Guajira y norte del Cesar?

El norte de Colombia lleva por lo menos dos décadas en un proceso que lo configura como escenario crítico en la transición energética. Desde los primeros experimentos en generación de energía eólica en Uribe con el proyecto Jepirachi de EPM, la idea de una región con potencial de vientos y radiación solar ha sido central en el discurso público (Jaramillo, 2013). Por un lado, según los mapas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, el área del sur de La Guajira y norte del Cesar tiene una excelente radiación solar durante todo el año, lo que la hace perfecta para desarrollar proyectos de energía solar. Por el otro, el pasado violento y la estructura de tenencia de la tierra de la región la hacen atractiva para empresas privadas que buscan operar en terrenos particulares, principalmente antiguas propiedades de terratenientes. En comparación con los territorios del norte, compuestos en su mayoría por resguardos indígenas, el Sur de La Guajira y el Norte del Cesar están más expuestos a acciones públicas, privadas, y en general, de las élites.

Además, desde el año 2014, al menos dos aspectos contribuyeron a que el sur de La Guajira y el norte del Cesar fueran escenarios privilegiados de este proceso. El primero, fue la demora y dificultades de ejecución de proyectos, principalmente eólicos, localizados en la Alta Guajira. Un proyecto particularmente sensible que demoró el desarrollo eólico fue la dificultad de la construcción de la línea de alta tensión (Colectora 1 y 2, a cargo del Grupo de Energía de Bogotá) que serviría para transportar la energía producida en estos proyectos. El segundo aspecto fue que los proyectos solares se convirtieron en una opción atractiva, fácil de estructurar y desarrollar por la modularidad, escala e interconexión.

Asimismo, el territorio lleva consigo un legado de múltiples ciclos extractivos. El más importante y reciente es la mina de carbón de El Cerrejón, una concesión masiva de 64,000 hectáreas (ha) con un tajo de casi 14,000 ha. La actual bonanza de energías renovables es directamente facilitada por este presente extractivo y sus legados. Los proyectos energéticos actuales dependen de instituciones y edificaciones del complejo de El Cerrejón y de procesos violentos del pasado en la región, como la exclusión de personas de territorios estratégicos (Bouzarovski et al., 2014; Ulloa, 2023). Sin embargo, la promesa de desarrollo, sistemáticamente incumplida, deja a la región abierta a nuevas fantasías de ganancias futuras y especulaciones. Hoy en día las energías renovables están llenando esas fantasías en medio del discurso global sobre la necesidad de las transiciones energéticas. Por lo tanto, más allá del sol y el viento, las condiciones óptimas incluyen un entorno institucional e infraestructural que hace posible la construcción de parques solares y eólicos.

Por otro lado, el despliegue de esta bonanza ha ocurrido en un contexto de alta vulnerabilidad energética. No sólo hay limitaciones para el acceso a la energía, sino una endémica incertidumbre sobre su estabilidad y seguridad. Personas y comunidades históricamente marginadas han convivido con tarifas de energía muy altas y han buscado su acceso a través de líneas eléctricas informales en los llamados “barrios subnormales”. En este contexto, una ola de proyectos asociados a superar esta situación a través de la energía solar se sumó y amplificó la bonanza. Además de los múltiples emprendimientos privados que promueven el acceso a paneles, baterías y contadores bidireccionales para las casas que pueden tomar tanto como aportar electricidad a la red, se encuentran las iniciativas que promueven el acceso a energía solar fotovoltaica como opción de superación de la violencia y la pobreza rural. Dentro de estas últimas se cuentan la entrega de paneles solares a través de la Agencia para el Desarrollo Rural, los cientos de paneles entregados en la región a través de los proyectos relacionados con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), y la iniciativa de gran escala del gobierno actual de desplegar un modelo propio de “Comunidades Energéticas”. Todas estas iniciativas toman lo fotovoltaico como el objeto de la aspiración de rehacer las relaciones sociales en el territorio por medio de diversas ideas de justicia, y al mismo tiempo obtener ganancias políticas o económicas de este nuevo “paisaje de intensificación energética” (Jones, 2014).

Una historia de legados de desigualdad

San Juan del Cesar se sitúa entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá. Actualmente, a través del municipio se proyecta un flujo de más de 12 gigavatios de electricidad y alrededor de 300 megavatios de energías renovables, entre solar y eólica. Muchos de estos proyectos se concentran en Guamachal y Los Haticos, dos de los corregimientos del municipio. En estos mismos corregimientos se han desarrollado previos proyectos de transmisión de energía, como la subestación San Juan 220, y la línea que conecta a San Juan con Valledupar.

Aunque San Juan y sus corregimientos sean territorios donde se genera y transporta electricidad, la exclusión del acceso al servicio formal, la intermitencia del servicio y el alto costo de la energía se han convertido en símbolos de injusticia en medio de los constantes planes de proyectos de electrificación.

Antes de la llegada de los *focos* (bombillas), lámparas de gas colgadas en ambas caras de las puertas de las casas iluminaban Los Haticos. Fue solamente hasta 1982 que los primeros bombillos eléctricos se iluminaron en el corregimiento. La situación energética de Guamachal era similar. Como complemento a los mechones, velas y lámparas de tubo, se usaba la madera del Guayacán como leña para iluminar las noches y cocinar. Luego en 1993 los postes y cables fueron instalados, y la luz eléctrica llegó al corregimiento.

Sin embargo, desde el principio la electrificación de dichos territorios fue “subnormal”. La energía siempre fue obsoleta, los cables usados para construir la infraestructura eran viejos y los postes no eran de concreto. El acceso a la red funcionaba en una zona gris en la cual no era energía con estándares técnicos, se cobraba distinto a través de esquemas como “Energía Social” de Corelca y luego Electricaribe, y las responsabilidades de los prestadores de servicios eran diferenciadas.

Pero a la vez, la experiencia directa con la energía en territorios rurales de San Juan no puede entenderse por fuera de una relación íntima con las élites, pues actores poderosos los hacían posibles, a menudo en cargos de elección popular, servidores públicos del municipio, y los terratenientes. Familias como los Lacouture han sido cruciales en estos procesos. La capacidad de los Lacouture de territorializar el poder y el parentesco iban de la mano de relaciones íntimas con múltiples mujeres, pues esto era central para poder operar en el territorio y acceder al trabajo de los habitantes de la región. Los Lacouture funcionaron como aglutinadores de relaciones de élite, pues en la larga descendencia confluyen familias de importante influencia en la región (Gerlein, Celedón, Dangond, Cuello, Egurrola, Hinojosa, Daza; algunos de los cuales descendientes de inmigrantes llegados durante el siglo XIX y XX). A través de estrategias de parentesco oficial y

práctico, aumentó la influencia de estas familias tanto en pares del poder como entre subordinados.

Más adelante, descendientes de estas familias tendrían los recursos necesarios para poseer tierras en zonas rurales y aspirar a cargos políticos. Así, consolidarían su autoridad por medio de la construcción de infraestructuras eléctricas. Pero estos líderes políticos no necesariamente aportaron todos los recursos. Más bien, la electrificación inicial implicó un complejo arreglo de trabajo más típico de relaciones agrarias muy verticales que implicaron trabajo no remunerado por parte de la comunidad, asumiendo que el bien buscado era suficiente compensación.

Para el caso de la comunidad de Los Haticos esto es muy claro, pues para que en 1982 la luz llegara al pueblo, sus habitantes tuvieron que aportar la mano de obra. Cada persona debía cavar el hueco donde se instalarían los postes contruidos a partir de madera de eucalipto. De manera similar, en Guamachal la electricidad llegó gracias a un líder político vinculado marginalmente con las familias del corregimiento por ser poseedor de tierras, y los habitantes de la comunidad participaron en los arreglos iniciales de la infraestructura. En ese sentido, las relaciones políticas pasadas y emergentes son experimentadas a través de las infraestructuras y las formas de poder local.

Esta clase de arreglos íntimos entre élites y subalternos es central en la subsistencia de la desigualdad estructural hasta el presente. Atraviesa las formas de trabajo, las relaciones políticas, dones y contradones en constante circulación en el territorio que han terminado en un acaparamiento de recursos por parte de las familias de élite. Ha sido en medio de la confluencia entre vulnerabilidad energética, intimidación de las élites e infraestructuras del poder, que impera el deseo por la conexión a fuentes de energía baratas que permitan la autonomía de las personas y las comunidades fuera de la relación con los prestadores de servicios públicos.

Acaparamiento, toxicidad y violencia

Los proyectos de energía en el sur de La Guajira y el norte del Cesar, desde subestaciones hasta torres de transmisión, han sido posibilitados por sus “territorios disponibles”, llenos de monte, abiertos a convertirse en los espacios de desarrollo de la bonanza solar. La producción de estos territorios disponibles se ha dado históricamente a través de procesos de acaparamiento, del uso intensivo de agroquímicos, y de las disputas violentas en el marco del conflicto armado.

La estructura de tenencia de la tierra actual en la región ha resultado de la capacidad de familias poderosas de invertir en alambre de púas para cercar territorio usado hasta entonces como común (Baute, 2011). A partir de la década de 1970, en tierras consideradas baldías aledañas a Guamachal, Los Haticos y Veracruz, corregimientos de San Juan del Cesar, familias de élite iniciaron el proceso de apropiación de grandes porciones de este terreno por medio de su cercamiento con alambre de púas. El acaparamiento no fue violento, pues estos hombres poseían relaciones cercanas, podría decirse de amistad, con los habitantes rurales; lo que sí sucedió, dicen los actuales pobladores, es que sacaron provecho de la inocencia e ingenuidad de los antepasados. Así, en el norte del país, grandes extensiones de tierra quedaron en manos de pequeñas élites regionales, ocasionando una marginación histórica al campesinado y a pequeños productores rurales (CNMH, 2022).

La transición energética en este territorio se ha posibilitado por esta estructura de la tenencia de la tierra. Allí, las empresas privadas que buscan instalar granjas solares, parques eólicos y torres de transmisión en los predios negocian principalmente con las pocas familias poseedoras para establecer los términos del arrendamiento. Los beneficios de la transición energética en este sentido se interpretan localmente desde la desigualdad. El mayor beneficio lo obtendrán los dueños de las tierras, y para los habitantes será el dinero obtenido a partir de la venta de su fuerza de trabajo.

La colonización de baldíos y la expansión de grandes propiedades fueron en parte posibilitadas por las políticas agrarias de la década de 1950 y 1960, enfocadas en la provisión de créditos para el desarrollo de cultivos comerciales y el incentivo a la utilización de insumos químicos agrícolas (Wagner Medina, 2011). Fue precisamente por la fertilidad de los suelos, los bajos precios de las tierras y la promoción inicial por parte del Estado que en grandes extensiones de tierras familias con recursos sembraron algodón a lo largo del Valle del río Cesar. De este modo, hasta finales de la década de 1980, esta región se posicionó como el principal distrito algodonero en el país (*Ibid*).

Debido a la presencia de plagas entre los cultivos, se intensificó el uso de glifosato y furadan, dos pesticidas altamente tóxicos. Tras un intenso ataque de plagas, la baja en los

precios de la fibra en el mercado internacional y el incremento en los precios de fertilizantes e insecticidas, desde 1973 inició la crisis de esta industria intensificando el desempleo y la violencia (*Ibid*). La contaminación, la deforestación, la transformación en la composición orgánica de los suelos, y el acaparamiento de tierras, han sido las múltiples causas de la pérdida progresiva de la vocación agrícola y el aumento de la ganadería en la región. En el caso de La Guajira y el Cesar, el daño del suelo ha representado la condición de posibilidad de una nueva transición hacia las plantaciones solares.

Sin embargo, el declive en la vocación agrícola del municipio se dio fuertemente a partir de los noventa. Para ese entonces inició la incursión del recién conformado Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), liderado por Jorge 40. Por la crítica situación y la formación de asentamientos por parte de los integrantes de las AUC, los habitantes y los dueños de tierras se vieron en la obligación de abandonar sus terrenos y desplazarse a otros corregimientos, a la cabecera municipal o a otras zonas del país como huida de las amenazas y extorsiones. Algunos pudieron llevarse consigo su ganado, otros no. Tras el no retorno, los grandes predios se transformaron en “puro monte”, facilitando el ingreso de infraestructuras energéticas.

La violencia sufrida por el municipio, pero específicamente por los poblados rurales abrió las puertas de la transición energética en dos sentidos. En un primer sentido, arruinó a tal punto las vidas que las hizo ideales para el despliegue de un nuevo lenguaje de la transición energética como forma de desarrollo y paz. En un segundo sentido, terminó de abrir los espacios para la actividad privada. Ambos son focos centrales de creación de desigualdades y recreación de las élites en la bonanza solar.

¿Cómo están reaccionando las élites?

Las élites políticas regionales tienen una posición ambigua frente a la bonanza solar. Por un lado, pueden ser más fácilmente eludidas como intermediarias gracias a las características técnicas de los sistemas fotovoltaicos. Por el otro, ven una gran oportunidad de reconvertir el acaparamiento de tierras que les dio origen en una nueva oportunidad de renta. En cualquier caso, navegan dicha ambigüedad siendo intermediarios de las empresas de proyectos a gran escala y que les permite reconvertir la responsabilidad social corporativa de estas en forma de dádivas para sus bases políticas; no encontramos ningún síntoma de resistencia de las empresas ante estos pequeños actos de apropiación de sus acciones con fines políticos.

La principal oportunidad que tienen las élites en posiciones de gobierno de reconvertir los proyectos fotovoltaicos en forma de favor político son los proyectos enmarcados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Los municipios de lo que abarcamos como la frontera solar son todos objeto de estos programas y la electrificación rural a través de paquetes de paneles y baterías ha sido un programa de desarrollo privilegiado. Estos programas, además de servir como forma visible de inversión social que puede traducirse en apoyo político, también sirve para que patronazgos rurales se reinventen.

Mientras tanto, el gobierno nacional busca hacer de Comunidades Energéticas un programa bandera. Quienes trabajan intensamente en su implementación, buscan blindar el programa de intermediarios locales y generar organizaciones locales repotenciadas a través de la esperanza de que la electricidad represente un fortalecimiento socioeconómico a través de “proyectos productivos” que hagan sostenibles las “soluciones energéticas”. Por lo pronto esta estrategia no se está conectando explícitamente con el gobierno local de turno, pero hay un potencial grande de que esto ocurra.

Para los liderazgos comunitarios rurales que son los potenciales beneficiarios de las estrategias de Comunidades Energéticas (exceptuando las soluciones para salud, educación y comercio en contexto urbano), no pueden evadir tan fácilmente las trabas que ponen funcionarios locales en la emisión de documentos clave para que las comunidades energéticas ocurran. Esta es otra forma a través de las cuales grupos de individuos buscan aprovechar la bonanza con el fin de crear cooptación.

Por otro lado, identificamos el fortalecimiento de una aspiración de las clases medias de aprovechar las tecnologías fotovoltaicas para “desconectarse” en la medida de lo posible. Quienes tienen el dinero para invertir, buscan montar unidades en sus casas para revertir la vulnerabilidad energética a la que se han visto expuestas por parte de empresas de

servicios públicos y gobiernos locales. Siempre está latente una fuerte ideología individualista en estos esfuerzos de las clases medias cuyo efecto político y societal debe ser tenido en cuenta como un contrapeso frente a presiones de grupos poderosos que han controlado históricamente el acceso a elementos clave para la vida como la energía.

¿Qué nuevos valores están apareciendo?

La relación entre comunidades y proyectos fotovoltaicos es posible porque la energía fluye por los cuerpos de las personas no sólo a través de electrones, sino de valores y aspiraciones. Así, nuevas éticas y deseos mueven la expansión solar. Estos surgen en medio de nuevos regímenes de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y del trabajo, en el proyecto explícito de crear una nueva “cultura del pago” a través de nuevos esquemas de electrificación, y en problemas de desigualdades epistémicas para finalmente resituar las potencias políticas de las comunidades a través de nuevas infraestructuras.

Dos de las grandes promesas que emergen una vez las empresas privadas llegan al territorio son las inversiones que traerán como parte de sus programas de RSE, y las oportunidades laborales que serán habilitadas. Sin embargo, tales promesas se van en picada una vez inician las socializaciones de los proyectos y los procesos de contratación.

Por un lado, si bien como parte de los programas de RSE se encuentra brindar una inversión para las comunidades locales, por ejemplo, para la construcción o reparación de infraestructuras, la sensación de insuficiencia es amplificada porque los recursos son en realidad obligatorios por ley. De acuerdo con la legislación colombiana, las obras energéticas deben invertir el 1 % de los recursos de la fase de construcción en “inversión social”. La contradicción implícita desde el punto de vista ético de algunos líderes es que, si algo es obligado por la ley, hay un problema de fondo en la autenticidad moral de la inversión. Como si fuera poco, el trabajo que implica la construcción o mantenimiento de las obras es subcontratada por la misma empresa. Para una población cuyo acceso al trabajo asalariado se ha convertido en el principal medio de subsistencia, un arreglo de este tipo implica una responsabilidad apócrifa.

Por el otro, la promesa de la empleabilidad jamás se conseguirá cumplir por completo por los excedentes de mano de obra existentes en los territorios (Daggett, 2019). La vinculación laboral en los parques solares, en etapa de instalación, puede durar hasta unos 6 meses. Pero en la etapa de operación, que toma unos 25 a 30 años, solamente unas 2 personas son vinculadas para la vigilancia, muchas veces externas a la comunidad. Y en etapas de mantenimiento, que se hacen mínimo una vez al año, unas cuantas personas son contratadas para la limpieza de los paneles. Ahora, la imagen que constituye la construcción de la línea de transmisión es la típica del ensamblaje en una línea de producción. Los pocos trabajadores contratados sólo deben seguir el paso a paso y encajar las piezas de las torres que llegan desde China. Y quienes no tienen en sus planes aspirar a estos cargos y permanecer en labores agrícolas, son muchas veces relacionados con la pereza, ineficiencia y atraso (*Ibid*).

Ante la llegada de las empresas y el incumplimiento de las expectativas que emergieron en un inicio, las carreteras y caminos se han convertido en un punto especialmente sensible desde el punto de vista de las comunidades. Estas son sujetos de bloqueos, tanto para manifestar a través de ellas la exigencia de oportunidades laborales, como para demandar el precario estado de las vías, que ha empeorado con el paso de maquinaria de las empresas privadas. Pero, debido a la estructuración de la industria energética, colmada de subcontratistas, la responsabilidad ante la precarización de los caminos se traspasa constantemente entre los entes municipales y las empresas. Por su parte, las empresas dicen que es responsabilidad del Estado asumir las mejoras de los caminos, pero funcionarios del gobierno contestan asegurando que esto no les corresponde. En medio de las manifestaciones, el Estado, las empresas, e incluso el ejército, intervienen, pero sin remediar la raíz de la fractura.

Por otro lado, con el arribo de proyectos de electrificación que prometen superar la pobreza, la violencia, y la vulnerabilidad energética, los proyectos orientados a comunidades rurales están atravesados por un lenguaje moral sobre la virtud en el aprendizaje del pago de los servicios públicos. Por ejemplo, Air-e, la empresa de servicio de energía del Caribe, intenta normalizar la “energía subnormal” mediante planes de pago para condonar las deudas. Proyectos como el de La Victoria en El Copey se han propuesto explícitamente en este sentido. Esta tendencia no se circunscribe a proyectos privados o filantrópicos, muchos proyectos estatales asumen que los paneles solares tienen por defecto una pedagogía ética que incluye expresiones como “la cultura de pago”. Comunidades Energéticas presenta una tensión entre un discurso ético de la productividad, asociado a la obligatoria formulación de un proyecto productivo, y cuidado, en el sentido en que son las mismas organizaciones comunitarias las que deben encargarse de hacer el mantenimiento y recolectar cuotas que hagan sostenible el proyecto. El mantenimiento de infraestructuras comunitarias como la solar, se supone, van a generar este tipo de visiones transaccionales por los servicios.

Pero todas estas estrategias no han remediado la cuestión alrededor de las facturas y la “subnormalidad”. En esta región, los comercializadores de energía operan como los materializadores de la injusticia. Los precios de energía en el Caribe colombiano son los más altos del país, y la infraestructura eléctrica es inadecuada, a pesar de las constantes solicitudes. Así pues, la idea de pagar por el servicio de energía en esta región involucra revisar grandes fracturas generadas en el pasado por ElectriCaribe.

Futuros en transición

Los futuros energéticos actuales son producto de experimentos técnicos y financieros. Desde nuevos derivados hasta tecnologías que hacen más baratas los paneles y las baterías deben ser tenidas en cuenta. Pero también los experimentos más invisibles ocurriendo en oficinas gubernamentales, asambleas de Juntas de Acción Comunal o Consejos Comunitarios, cocinas y caminos.

Uno importante son nuevos esquemas empresariales y de financiamiento a pequeña escala. Apuntan principalmente a la generación de microgranjas, esquemas comunitarios y nuevas formas de filantropía. Aunque ninguno apunta a cuestionar las condiciones que dieron origen a la crisis planetaria, sí dan pasos concretos hacia superar ciertas formas de inequidad de género, ética, racial y geográfica.

Por otro lado, el gobierno local, regional y nacional está reexaminando sus propios territorios para reconvertir zonas dañadas en áreas que puedan generar bienestar a familias y a comunidades. Muchos de estos ensayos aspiran a revertir relaciones jerárquicas entre centro y periferia y actores privados que se han atribuido demasiado poder en el bienestar colectivo, tales como empresas prestadoras de servicios públicos, órganos de planificación, archivos ambientales, entre otros ejemplos.

Finalmente, muchas conversaciones invisibles deben ser visibilizadas para que otros experimentos en información ambiental, deliberación sobre impactos de los proyectos, y distribución de beneficios. Nuestra propia apuesta en el proyecto fue crear espacios de “diseño de futuros” entre las mismas comunidades para que lo conviertan en su propio insumo en las conversaciones que vienen en medio de la transición energética.

Recomendaciones

Para comunidades	<ul style="list-style-type: none"> • Agenciar espacios de diseño de futuros. • Solicitar la debida información ambiental sobre los proyectos que serán desarrollados en sus territorios.
Para hacedores e implementadores de políticas	<ul style="list-style-type: none"> • Crear mecanismos de vigilancia sobre conflictos de intereses creados entre empresas y gobiernos por la intermediación y uso de la RSE como capital político. • Crear mecanismos de seguimiento para proyectos de pequeña escala y cuya invisibilidad está facilitada por los toques de MW o Voltios en el licenciamiento. • Facilitar espacios de diálogo que incluyan al mismo tiempo Consejos Comunitarios y Juntas de Acción Comunal, para superar la división por la cual las empresas privadas operan en los territorios. • Generar esquemas de acceso a la energía que eviten la estigmatización de las personas por la violencia y exclusión que han sufrido a través de categorías como la “subnormalidad”. • Involucrar al Ministerio del Trabajo de una forma más activa en los debates sobre empleabilidad en proyectos de energías renovables que llegan a los territorios.
Para empresas	<ul style="list-style-type: none"> • Maximizar los procesos de debida diligencia en la adquisición de permisos y adquisición de predios. • Enfocar los esfuerzos de Responsabilidad Social Corporativa en restauración ecológica y reparaciones sociales de territorios maltratados (por violencia y daño ecológico) para que tengan un reflejo importante en el bienestar futuro. • Posibilitar oportunidades laborales en las etapas de operación y mantenimiento en los proyectos

	de energías renovables, para brindar estabilidad laboral en los territorios.
Para centro de investigación	<ul style="list-style-type: none"> • Crear repositorios y canales abiertos de información ambiental orientados a las preguntas de comunidades. • Evitar dinámicas extractivas en los procesos de investigación y reconocer el trabajo de los coinvestigadores locales en investigaciones (en la autoría y la remuneración económica). Esto implica formular las investigaciones, desde un inicio, junto a los integrantes de las comunidades, con el fin de que los resultados sean útiles para sus procesos.
Para la cooperación internacional	<ul style="list-style-type: none"> • Formular sus proyectos desde el diálogo con las comunidades. • Aportar escenarios de capacitación para la formulación de proyectos que apunten a movilizar las metas comunitarias. • Integrar las preocupaciones de las comunidades alrededor de la transición energética a sus agendas; además de descarbonización, es clave pensar desde las experiencias de injusticia alrededor de la energía.

Agradecimientos

Al Instituto Colombiano de Antropología por el apoyo generoso a través de los estímulos de investigación 2024, por medio de la beca para investigador con trayectoria (RESOLUCIÓN NÚMERO 0665 DE 2024), proyecto EST24-ICANH-000236.

A los habitantes de los corregimientos de Guamachal, Los Haticos y Veracruz, quienes a través de conversaciones y de su vida cotidiana, nos mostraron que otros futuros energéticos son posibles, y que ya están sucediendo desde hace años.

A los funcionarios de la Alcaldía de San Juan del Cesar, por abrirnos las puertas de sus oficinas en medio de días abrumadores.

Al Ministerio de Minas por experimentar con diferentes maneras de poner la industria energética a funcionar al servicio de las comunidades.

Bibliografía

Baute, A. S. (2011). *Líbranos del bien*. Alfaguara.

Bouzarovski, S., Petrova, S., & Tirado-Herrero, S. (2014). *From Fuel Poverty to Energy Vulnerability: The Importance of Services, Needs and Practices*.

(CNMH), C. N. de M. H. (2022). *La tierra se quedó sin su canto. Trayectoria e impactos del Bloque Norte en los departamentos de Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena (tomo I)*. Dirección de Acuerdos de la Verdad, CNMH.

Daggett, C. N. (2019). *The birth of energy: fossil fuels, thermodynamics and the politics of work*. Duke University Press.

Jaramillo, P. (2013). *Las servidumbres de la globalización*. Clacso.

Jones, C. F. (2014). *Routes of power: energy and modern America*. Harvard University Press.

Paniagua, K., & Cornejo, P. (2020). Tenkuä: Designing Futures for Broken Cities. *Temas de Disseny*, 36, 178–191.

Reichel-Dolmatoff, A., & Reichel-Dolmatoff, G. (2012). *La gente de Aritama: la personalidad cultural de una aldea mestiza de Colombia*. Pontificia Universidad Jave.

Ulloa, A. (2023). Aesthetics of green dispossession: From coal to wind extraction in La Guajira, Colombia. *Journal of Political Ecology*, 30(1), 1–22.

Wagner Medina, G. M. (2011). *Las huellas ambientales del oro blanco: La expansión algodonera en el valle del río Cesar (1950-1980)*.

Metodología

Estudiar la frontera energética

Empezamos a mapear el vínculo entre un régimen extractivo, aún en desarrollo, pero profundamente cuestionado, y uno renovable, todavía incipiente, pero fuertemente deseado. Elegimos La Guajira y el norte del Cesar porque sabíamos que era un territorio donde se superponían ambos procesos.

San Juan del Cesar es un municipio clave para rastrear estas relaciones. Este territorio se sitúa entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá. Por un lado, allí se cruzan las historias extractivas de la región, el acaparamiento de tierras, familias de élite (los Lacouture, los Hinojosa, los Egurrola entre muchas otras), la presencia de grupos armados, y comunidades que han padecido la marginación social y espacial y de vulnerabilidad energética. Por el otro, allí están presentes los grandes proyectos de transmisión de alta tensión, de subestaciones, proyectos PDETS y proyectos de comunidades energéticas. Y actualmente a través del municipio se proyecta un flujo de más de 12 gigavatios de electricidad y alrededor de 300 megavatios de energías renovables, entre solar y eólica.

Recorrimos los territorios a pie, en moto y en carros. Caminamos junto a habitantes y líderes, y participamos en trabajos comunitarios de la mano de las comunidades. Trazamos las historias de la energía y del uso del territorio para entender los poblados rurales por los cuales cruzan estos proyectos en su complejidad histórica y geográfica. Hicimos entrevistas sobre previas bonanzas, usos de la energía en el presente y el pasado, y sostuvimos múltiples conversaciones sobre las aspiraciones y deseos de otros futuros. Asimismo, establecimos conversaciones con funcionarios de la alcaldía de San Juan, líderes políticos locales, y personal de las empresas (lo que incluye obreros, trabajadoras sociales, estructuradores y desarrolladores de proyectos).

Respecto al *acceso a la información*, nos interesamos en la accesibilidad y transparencia de los archivos sobre los proyectos de energías renovables presentes en Corpocesar (Valledupar), CorpoGuajira (Riohacha) y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Bogotá). Finalmente, en términos de las *características de los proyectos*, observamos la

infraestructura utilizada y las tecnologías empleadas más allá de los paneles o turbinas, como subestaciones y estaciones de monitoreo.